**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO**

EXPEDIENTE: TEEG-JPDC-68/2012.

ACTOR: Humberto Molina Herrera.

ÓRGANOS RESPONSABLES: Comité Ejecutivo Estatal y Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.

TERCEROS INTERESADOS: Miguel Ángel Montoya Hernández.

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR RENE GARCÍA RUÍZ.

RESOLUCIÓN.- Guanajuato, Guanajuato, resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al día veintidós de mayo del año dos mil doce.

VISTO para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente al rubro indicado, promovido por el ciudadano **Humberto Molina Herrera**, en su calidad de militante y candidato a cuarto regidor propietario del Partido de la Revolución Democrática, para el ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato.

Dicho medio de impugnación, se presenta vía ***per saltum***, toda vez que el recurrente manifiesta que en sesión de fecha treinta de abril del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato otorgó y aprobó la solicitud de registro de planilla presentada por el Partido de la Revolución Democrática para contender en la elección municipal de Acámbaro, Guanajuato; además de argumentar que considera que ésta instancia jurisdiccional debe conocer el presente asunto, de manera oportuna, garantizando con ello, formal y materialmente, los derechos político-electorales que considera le han sido transgredidos.

Así las cosas, se inconforma esencialmente en contra de:

a) La solicitud de registro presentada por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, respecto de la cuarta regiduría propietaria de la planilla en el municipio de Acámbaro, solicitud presentada el veintiuno de abril del presente año y aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el día treinta de abril del año dos mil doce;

b) El incumplimiento del acuerdo de fecha veintitrés de abril de esta anualidad, por medio del cual el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, determinó otorgar al promovente, de manera definitiva, la candidatura a cuarto regidor propietario de la planilla a registrar para contender en la elección de ayuntamiento en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- Antecedentes. De lo narrado por la accionante en su escrito de demanda y demás constancias que obran en el sumario, se desprenden los hechos siguientes, acontecidos el presente año:

1. Convocatoria.- En fecha veintiocho de marzo, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el numeral V, de la base 6, de la convocatoria publicada el tres de enero por el Pleno del VIII Consejo Estatal, presentó ante la Mesa Directiva del mencionado VIII Consejo, escrito mediante el cual hacía llegar la propuesta de planilla para la elección de ayuntamiento en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato.

Presentada la propuesta referida en el párrafo anterior, únicamente con el candidato a Presidente Municipal, el Pleno del VIII Consejo Estatal, decidió mantener en reserva el resto de la planilla en el citado Municipio.

2. Sesión del Comité Ejecutivo.- En fecha veintiuno de abril, en sesión del Comité Ejecutivo Estatal, de acuerdo a lo narrado por el promovente, dicho órgano partidario aún no tenía decidido quiénes serían candidatos a síndicos y regidores, por lo que ante la premura del vencimiento del plazo de registros, se resolvió presentar ante la autoridad administrativa local la planilla para el municipio de Acámbaro; acordándose que dentro del plazo, que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado utiliza con la finalidad de que los Partidos Políticos subsanen las deficiencias de sus registros, el órgano partidario depuraría la lista de candidatos, con la intención de presentar a los que tuvieran el carácter de definitivos.

3. Sesión del Pleno del Comité Ejecutivo Estatal.- En fecha veintitrés de abril, en sesión del Pleno del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, una vez presentado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el registro de la planilla para el municipio de Acámbaro, respecto a la fórmula del cuarto regidor propietario, cuyo registro recayó por unanimidad en Miguel Ángel Montoya Hernández, se decidió retirar el registro de este último, toda vez que de acuerdo a lo narrado por el accionante, el propio candidato Montoya Hernández, manifestó expresamente su deseo de renunciar a la misma; decidiendo el órgano partidista que en su oportunidad, una vez que se presentara el requerimiento de la autoridad administrativa electoral local, se registraría al promovente Humberto Molina Herrera.

4. Requerimiento del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.- En fecha veinticuatro de Abril, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, requirió al Partido de la Revolución Democrática con la finalidad de subsanar deficiencias en la planilla del municipio de Acámbaro.

5. Cumplimiento del requerimiento.- En fecha veintiséis de abril, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su presidente, subsanó el registro de la planilla de Acámbaro, sin embargo, no retiró el registro de Miguel Ángel Montoya Hernández, no obstante que el mismo había renunciado, omitiendo el registro del promovente, a pesar de que mediante acuerdo de fecha veintitrés de abril, se había acordado tal situación.

6. Publicación de registro de candidatos. El treinta de abril, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, publicó el registro de los candidatos presentados por el Partido de la Revolución Democrática para contender en la elección de ayuntamiento en la ciudad de Acámbaro, fecha en que afirma el promovente, tuvo conocimiento de que no se registró su candidatura, considerando que con ello fueron violentados sus derechos político-electorales.

SEGUNDO. Substanciación del Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

a) Recepción. En fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, a las 19:22:38 diecinueve horas con veintidós minutos y treinta y ocho segundos, fue recibido en este Tribunal el escrito de interposición del juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, promovido por **Humberto Molina Herrera**.

b) Turno. En observancia a lo dispuesto por los artículos 293 bis 3, párrafo tercero y 352 bis, fracción III del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; 13 y 82 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en fecha siete de mayo del año en curso, el Magistrado Presidente de este Órgano Jurisdiccional, acordó integrar el expediente **TEEG-JPDC-68/2012** y turnarlo a la ponencia del ciudadano Licenciado **HÉCTOR RENÉ GARCÍA RUÍZ**, Magistrado Propietario de la Cuarta Sala Unitaria de este Órgano Jurisdiccional.

c) Trámite. Por auto de fecha ocho de mayo del año en curso y notificado el día nueve del mismo mes y año, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 307 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se hizo saber a la autoridad señalada como responsable, a los terceros interesados señalados, así como a cualquier otro que pudiera tener interés legítimo que hacer valer, que contaban con un plazo de cuarenta y ocho horas, a efecto de que comparecieran y, en su caso, realizaran las alegaciones o aportaran las pruebas que estimaran pertinentes.

Plazo dentro del cual comparecieron los ciudadanos Hugo Estefanía Monroy en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática y Miguel Ángel Montoya Hernández, en su carácter de tercero interesado; en los términos a que se contraen sus escritos agregados en autos.

Con base a lo anterior, se encuentra dicho asunto en estado de dictar la resolución correspondiente, y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO.- Jurisdicción y competencia. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato ejerce jurisdicción y es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base VI y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 286 al 289, 293 bis al 293 bis 3, 307, 325, 335, 350, fracción I, 351, fracción XV 352 bis, fracciones I y XIV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, 1, 4, 6, 9, 10, fracción I y XX, 11, 13, 14, 15, 16, 17, fracciones I y XVI y, 21, fracción XVI, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.- Transcripción del ocurso impugnativo. La demanda planteada por el incoante, en lo medular es del tenor siguiente:

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2286 FRACCIÓN II, 287, 288, 293 BIS, 293 BIS 1 FRACCIÓN VII, 293 BIS 2 FRACCIONES B) Y C) Y SU ÚLTIMO PÁRRAFO Y 293 BIS 3 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, VENGO A INTERPONER FORMALMENTE JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO EN CONTRA DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Y DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, AMBOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE GUANAJUATO, MEDIO IMPUGNATIVO QUE SE PRESENTA POR LA VÍA PER SALTUM, TODA VEZ QUE, EN SESIÓN DE FECHA DEL 30 TREINTA DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO,, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, OTORGÓ Y APROBÓ LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PLANILLA PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO, GUANAJUATO, PARA ESTE PROCESO ELECTORAL DEL 2012 Y POR ENDE EL SUSCRITO CONSIDERA QUE ESTA INSTANCIA JURISDICCIONAL LOCAL ES LA QUE OPORTUNAMENTE DEBE DE CONOCER DEL ASUNTO, TODA VEZ QUE ME RESULTA NECESARIO GARANTIZAR QUE DE MANERA FORMAL Y MATERIAL SE RESTITUYAN EN TIEMPO Y FORMA, LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES QUE CONSIDERO LE FUERON TRANSGREDIDOS AL SUSCRITO, CON EL ACTUAR DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, ASÍ COMO DEL PROPIO ÓRGANO COLEGIADO QUE SE CITA; ACTUALIZÁNDOSE ASÍ LO QUE REZA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 293 BIS

2 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE GUANAJUATO.

ACTO QUE SE IMPUGNA.-

A).- LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN GUANAJUATO, RESPECTO DE LA CUARTA REGIDURÍA PROPIETARIA DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO GUANAJUATO, MISMO QUE SE REALIZÓ ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE L ESTADO DE GUANAJUATO, EN FECHA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2011, Y DEL CUAL TUVE CONOCIMIENTO HASTA QUE DICHA AUTORIDAD ELECTORAL EMITIÓ SU ACUERDO DE REGISTRO DE PLANILLA PARA TAL ELECCIÓN EN FECHA 30 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

B).- EL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, POR MEDIO DEL CUAL EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN GUANAJUATO DETERMINÓ OTORGARME EN DEFINITIVA LA CANDIDATURA DE CUARTO REGIDOR PROPIETARIO DE LA PLANILLA A REGISTRAR PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DE AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO GUANAJUATO EN ESTE PROCESO ELECTORAL LOCAL EN CURSO.

INSTANCIAS RESPONSABLES.- EL CITADO JUICIO CIUDADANO SE PRESENTA EN CONTRA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL Y EN CONTRA DEL PROPIO ÓRGANO COLEGIADO DENOMINADO COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, AUTORIDADES PERTENECIENTES AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN ATENCIÓN A QUE CON SU ACTUAR Y OMISIONES DE NO VELAR POR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA INTERNA, HAN FALTADO Y POR TANTO VIOLENTADO EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SUS PROPIOS ACUERDOS VOTADOS INCLUSIVE DE MANERA UNÁNIME;

LEGITIMACIÓN: EL QUE SUSCRIBE FUI DESIGNADO COMO CANDIDATO A CUARTO REGIDOR PROPIETARIO POR EL PLENO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN GUANAJUATO, EN SESIÓN DE FECHA 23 DE ABRIL DE AÑO EN CURSO DE LA CUAL EXISTE ACTA CIRCUNSTANCIADA, MISMAS QUE NO ESTÁ EN MI PODER Y QUE OFREZCO DESDE ESTE MOMENTO COMO PRUEBA A FAVOR DEL SUSCRITO A EFECTO DE ACREDITAR MI INTERÉS JURÍDICO. PREVIA SOLICITUD DE REGISTRO DE PRECANDIDATURA PARA TALES EFECTOS PRESENTADA EN FECHA Y FORMA.

A EFECTO DE CUMPLIR CABALMENTE CON LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTE RECURSO, ME PERMITO MENCIONAR LOS HECHOS EN LOS QUE SE BASA LA PRESENTE IMPUGNACIÓN:

HECHOS

1.- EN FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO 2012 EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIRIÓ EL NUMERAL V DE LA BASE 6 DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN FECHA 3 DE ENERO DEL 2012 POR EL PLENO DEL VIII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PRESENTÓ A LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO VIII CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA ESCRITO MEDIANTE EL CUAL HACIA ILEGAL LA PROPUESTA DE PLANILLA PARA LA ELECCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO, GUANAJUATO.

2.- PRESENTADA DICHA PROPUESTA ÚNICAMENTE CON EL CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EL PLENO DEL VIII CONSEJO ESTATAL DECIDIÓ MANTENER EN RESERVA EL RESTO DE LA PLANILLA DE INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE ACÁMBARO GUANAJUATO, SITUACIÓN QUE DEJO EN ESTADO DE SUSPENSIÓN EL PROCESO ELECTIVO DE QUIENES INTEGRARÍAMOS LAS FÓRMULAS DE SÍNDICOS Y REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTE PARA DICHA ELECCIÓN, DELEGÁNDOLE AL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN GUANAJUATO TAL ATRIBUCIÓN.

3.- ASÍ LAS COSAS EN SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE FECHA 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SIENDO ESTE EL ÚLTIMO DÍA PARA SOLICITAR REGISTRO ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO CONFORME AL ARTÍCULO 177 FR. IV DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE GUANAJUATO, DICHO ÓRGANO PARTIDISTA NO DECIDÍA AÚN QUIENES SERÍAMOS AVALADOS PARA CONTENDER PARA DICHOS CARGOS, DECIDIENDO ANTE LA PREMURA DEL CIERRE DE REGISTRO CONSTITUCIONAL REGISTRAR UNA LISTA DE POTENCIALES CANDIDATOS SEGÚN LO CONSIDERARON PERTINENTE A EFECTO DE MANTENER VIGENTE EL DERECHO A REGISTRAR, PERO EN LA MISMA SESIÓN DEL COMITÉ SE DECIDIÓ QUE SE TOMARÍAN EN CUENTA LAS SIGUIENTES 48 HORAS PARA

SUBSANAR DICHO REGISTRO Y EN SU CASO PRESENTAR A LOS CANDIDATOS DEFINITIVOS.

4.- ASÍ LOS HECHOS EN FECHA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2012, SIENDO LAS 23 HORAS CON 25 MINUTOS, ES DECIR FALTANDO 35 MINUTOS PARA EL CIERRE DE REGISTROS CONSTITUCIONALES, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL HUGO ESTEFANÍA MONROY DECIDIÓ PRESENTAR REGISTRO DE PLANILLA DE AYUNTAMIENTOS EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN GUANAJUATO, MISMO QUE INCLUÍA ENTRE SUS CANDIDATOS A CUARTO REGIDOR PROPIETARIO Y CUARTO REGIDOR SUPLENTE DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO GUANAJUATO A LOS CC. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA HERNÁNDEZ Y JOSÉ SOCORRO MUÑOZ RESPECTIVAMENTE, ESTO A SABIENDAS QUE LOS MISMOS AÚN NO ERAN DETERMINADOS COMO CANDIDATOS DEFINITIVOS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL.

5.- ASÍ LAS COSAS Y TODA VEZ QUE EFECTIVAMENTE SE PRESENTÓ EL REGISTRO DE LA PLANILLA DESCRITA ESPERANDO EL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO A EFECTO DE QUE EL PRD PRESENTASE LAS DOCUMENTALES DE LOS CANDIDATOS REGISTRADOS PARA CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO GTO, TODA VEZ QUE LA MISMA SE REGISTRO SIN TALES PUES SEGUÍA A DISCUSIÓN SU DEFINITIVIDAD, EL PLENO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DECIDIÓ SESIONAR EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, PARA DETERMINAR LAS CANDIDATURAS DEFINITIVAS DE TAL ELECCIÓN, SUCEDIENDO QUE CON RESPECTO A LA FÓRMULA DE CUARTO REGIDOR PROPIETARIO, ESTANDO PRESENTES EL SUSCRITO Y EL C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA HERNÁNDEZ, SE PUSO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DICHA CANDIDATURA, VOTANDO POR UNANIMIDAD LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL RETIRAR EL REGISTRO DE LA CANDIDATURA DEL C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA HERNÁNDEZ, TODA VEZ QUE INCLUSO ÉSTE MANIFESTÓ EXPRESAMENTE SU DESEO DE RENUNCIAR A DICHA CANDIDATURA, Y EN SU LUGAR NOMBRAR COMO TITULAR DE LA MISMA AL SUSCRITO C. HUMBERTO MOLINA HERRERA.

6.- NO OBSTANTE LO ANTERIOR EN FECHA 24 DE ABRIL SE RECIBIÓ ESCRITO POR PARTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DONDE ORDENABA SUBSANAR LA PLANILLA ANTERIORMENTE REGISTRADA, COMENZANDO A CORRER EL PLAZO DE 48 HORAS PARA TALES EFECTOS, POR LO QUE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD DEBÍA HACER EFECTIVO EL ACUERDO DE FECHA 23 DE ABRIL DEL PRESENTE TOMADO POR TAL ORGANISMO PARTIDARIO, ASÍ COMO HACER EFECTIVA LA RENUNCIA EXPRESA DEL C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA HERNÁNDEZ A DICHA CANDIDATURA DE CUARTO REGIDOR PROPIETARIO, Y POR ENDE PRESENTAR EL REGISTRO DEL SUSCRITO EN SUBSANACIÓN SUSTITUYENDO AL C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA HERNÁNDEZ, NO OBSTANTE ESTO NO SE HIZO EN AGRAVIO DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL SUSCRITO DE VOTAR Y SER VOTADO, A PESAR DE EXISTIR RENUNCIA EXPRESA DEL C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA HERNÁNDEZ Y EN FECHA 26 DE ABRIL DE 2012 EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE DECIDIÓ SUBSANAR EL REGISTRO DE LA MENCIONADA PLANILLA SIN PRESENTAR EL REGISTRO DEL QUE ACTÚA Y MANTENER EL DEL C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA HERNÁNDEZ A PESAR DE SU RENUNCIA Y DEL ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD EN SESIÓN DE COMITÉ EN FECHA 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

7.- ASÍ LAS COSAS EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN FECHA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO PUBLICO EL REGISTRO DE LOS CANDIDATOS REGISTRADOS POR EL PRD A CONTENDER EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO GTO PARA LA ELECCIÓN CONSTITUCIONAL DE ESTE 2012, FECHA EN LA QUE EL SUSCRITO CONOCÍ LOS HECHOS DE MANERA DEFINITIVA QUE AHORA NARRO Y DONDE QUEDÓ CONSTANCIA QUE SE ME PRIVÓ DE MI DERECHO A SER ELECTO Y VOTADO COMO CUARTO REGIDOR PROPIETARIO PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS, CONVOCATORIA DE ACÁMBARO GUANAJUATO, EN CLARA CONTRAVENCIÓN A LOS ESTATUTOS, CONVOCATORIA, Y ACUERDOS ELECTIVOS TOMADOS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN GUANAJUATO.

DERIVADO DE LOS ANTERIORES HECHOS MANIFIESTO QUE AL SUSCRITO LE IRROGAN LOS SIGUIENTES:

AGRAVIOS Y CONSIDERACIONES DE DERECHO

PRIMERO: ME IRROGA PERJUICIO, LOS ACTOS DEL ÓRGANO RESPONSABLE MESA DIRECTIVA DEL VIII PLENO DEL CONSEJO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN GUANAJUATO, TODA VEZ QUE SÍ EN SESIÓN DONDE SE APROBÓ LA CONFORMACIÓN DE LAS CANDIDATURAS A LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO GUANAJUATO CONFORME AL RESOLUTIVO DE FECHA 28 DE MARZO

DEL AÑO EN CURSO, DECIDIÓ MANTENER EN RESERVA EL RESTO DE LA PLANILLA CONCERNIENTE A FÓRMULAS DE SÍNDICOS Y REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTE, DEBIÓ HACER EFECTIVO EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ Y DEFINITIVIDAD A EFECTO DE OBLIGAR AL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD DEFINIERA EL CARGO POR QUE EL SUSCRITO PODRÍA CONTENDER O NO, ESTO CONFORME A LA SOLICITUD QUE EN TIEMPO Y FORMA PRESENTÉ PARA TALES EFECTOS, ANTES DE LLEGAR A TENER QUE TOMAR DECISIONES CON PREMURA QUE LLEVARON A LA CONSECUENTE VIOLACIÓN DE MIS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES POR PARTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL PRESIDENTE DEL MISMO, ESTO CONFORME AL ARTÍCULO 65 K) DEL ESTATUTO VIGENTE DEL PRD.

SEGUNDO: ME IRROGA PERJUICIO LA OMISIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN GUANAJUATO DE HACER EFECTIVA SU DETERMINACIÓN TOMADA EN FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DONDE DECIDIÓ REGISTRARME EN DEFINITIVA COMO CANDIDATO A CUARTO REGIDOR PROPIETARIO POR LA PLANILLA A CONTENER EN LA ELECCIÓN DE ACÁMBARO GUANAJUATO, TODA VEZ QUE ANTE LA VOTACIÓN DEL PLENO POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES PARA NOMBRARME COMO CANDIDATO UNA VEZ HECHA MANIFIESTA LA RENUNCIA DEL C. MIGUEL ÁNGEL MONTOYA HERNÁNDEZ, OMITIERON CONDUCIRSE CONFORME AL ARTÍCULO 71 DEL REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIONES Y CONSULTAS VIGENTE PARA E PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, NI HICIERON EFECTIVAS LAS ATRIBUCIONES QUE EL VIII PLENO DEL CONSEJO ESTATAL DEL PRD LES OTORGÓ DENTRO DEL NUMERAL V DE LA BASE 6 DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN FECHA 3 DE ENERO DEL 2012 POR EL PLANO DE DICHO CONSEJO, Y DEJARON DE SOLICITAR MI REGISTRO ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE GUANAJUATO COMO CANDIDATO A CUARTO REGIDOR PROPIETARIO PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO GUANAJUATO.

TERCERO: ME IRROGA PERJUICIO EL REGISTRO 4º REGIDOR PROPIETARIO PRESENTADO POR EL C. PRESIDENTE DE COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO, ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN FECHA 21 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, TODA VEZ QUE SE HIZO SIN AGOTAR LA DEFINITIVIDAD DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN COMITÉ ESTATAL, Y AUN MÁS ME CAUSA AGRAVIO EL HECHO DE QUE UNA VEZ DEFINIDO EN SESIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE FECHA 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EL SUSCRITO SERÍA QUIEN DEBERÍA CONTENDER POR LA CANDIDATURA A CUARTO REGIDOR PROPIETARIO PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO DE ACÁMBARO GUANAJUATO, HAYA OMITIDO EN EL PLAZO DE 48 HORAS QUE TENÍA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, REALIZAR LA SUSTITUCIÓN Y EL REGISTRO PERTINENTE DEL SUSCRITO A DICHA CANDIDATURA CONFORME A LO TOMADO EN DECISIÓN POR UNANIMIDAD POR EL PLENO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 76 INCISO B) Y 77 INCISO F) DE LOS ESTATUTOS VIGENTES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y EN CLARA OMISIÓN AL MANDATO CONFERIDO POR EL PLENO DEL VIII CONSEJO ESTATAL DEL PRD EN GUANAJUATO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL V DE LA BASE 6 DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN FECHA 3 DE ENERO DEL 2012 POR EL PLENO DE DICHO CONSEJO.”

TERCERO.- Precisión del acto impugnado.- Debe decirse que el presente medio de impugnación se intenta vía *per saltum*, toda vez que el recurrente manifiesta que en sesión de fecha treinta de abril del año en curso, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato otorgó y aprobó la solicitud de registro de planilla presentada por el Partido de la Revolución Democrática para contender en la elección municipal de Acámbaro, Guanajuato; además de argumentar que considera que ésta instancia jurisdiccional debe conocer el presente asunto, de manera oportuna, garantizando con ello, formal y

materialmente, los derechos político-electorales que considera le han sido transgredidos.

Esencialmente, se inconforma en contra de:

a) La solicitud de registro presentada por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, respecto de la cuarta regiduría propietaria de la planilla en el municipio de Acámbaro, solicitud presentada el veintiuno de abril del presente año y aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado el día treinta de abril del año dos mil doce;

b) El incumplimiento del acuerdo de fecha veintitrés de abril de esta anualidad, por medio del cual el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, determinó otorgar al promovente, de manera definitiva, la candidatura a cuarto regidor propietario de la planilla a registrar para contender en la elección de ayuntamiento en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato.

No obstante que en la demanda se haga referencia a que el presente medio de impugnación se endereza en contra de los actos mencionados con anterioridad atribuidos a diversos órganos del partido político en donde milita el recurrente; es de advertirse que de la narración del medio de impugnación, también se destaca como acto susceptible de generarle algún perjuicio, el desarrollado en fecha **veintiséis de abril** del año en curso, en donde el Comité Ejecutivo Estatal de su partido, por conducto de su presidente decidió subsanar el registro de la planilla a contender en el municipio de Acámbaro, sin que se haya hecho la sustitución del candidato a cuarto regidor, Miguel Ángel Montoya Hernández, por la candidatura del impugnante.

CUARTO.- Requisitos de procedibilidad. El medio de impugnación bajo análisis reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 287, 289, párrafo primero, 293 bis al 293 bis 3; del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, como se constata enseguida:

Oportunidad. El medio de impugnación atinente fue promovido en tiempo, acorde a las siguientes consideraciones.

No obstante, que el medio de impugnación fue intentado vía *per saltum*, lo cierto es que debe resaltarse que en el mismo, el promovente afirma que tuvo conocimiento de “manera definitiva”, hasta el día treinta de abril, fecha en que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, publicó el registro de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática para contender en la elección de ayuntamiento, para la ciudad de Acámbaro, Guanajuato.

En ese orden de ideas, al no existir certidumbre respecto a qué fecha el promovente tuvo conocimiento del acto de que se duele, existiendo su manifestación de que fue hasta el día treinta de abril, esta autoridad jurisdiccional debe atenerse a tal fecha; y por tanto, de acuerdo con el sello de recepción del medio de impugnación que indica fue presentado el cuatro de mayo, es decir, al cuarto día de que se tuvo conocimiento, no cabe duda que debe considerarse interpuesto en tiempo.

Lo anterior tiene su fundamento en el criterio de jurisprudencia 8/2001, consultable en la Compilación 1997-2010 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, páginas 11 y 12, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO. La correcta aplicación del contenido del artículo 17 constitucional, en relación con lo dispuesto en los artículos 9o., párrafo 3; 10, a contrario sentido y 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lleva a determinar que cuando no existe certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un medio de impugnación electoral tuvo conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquélla en que presente el mismo, en virtud de que es incuestionable que, objetivamente, ésta sería la fecha cierta de tal conocimiento, pues no debe perderse de vista que, en atención a la trascendencia de un proveído que ordene el desechamiento de una demanda se hace indispensable que las causas o motivos de improcedencia se encuentren plenamente acreditados, además de ser manifiestos, patentes, claros, inobjetables y evidentes, al grado de que exista certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, razón por la cual, de haber alguna duda sobre la existencia y aplicación de las mismas, no es dable a partir de ellas desechar el escrito de demanda de mérito.”

Más aún, debe señalarse que los juicios ciudadanos intentados vía *per saltum*, deben presentarse en el plazo para la interposición del medio intrapartidario; lo anterior con fundamento en el criterio contenido en la jurisprudencia 9/2007, consultable en la Compilación 1997-2010 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, páginas 429 y 430, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

“PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U ORDINARIO LEGAL.- De acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala Superior con el rubro MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, el afectado puede acudir, *per saltum*, directamente ante las autoridades jurisdiccionales, cuando el agotamiento de la cadena impugnativa pueda traducirse en una merma al derecho tutelado. Sin embargo, para que opere dicha figura es presupuesto *sine qua non* la subsistencia del derecho general de impugnación del acto combatido, y esto no sucede cuando tal derecho se ha extinguido, al no haber sido ejercido dentro del plazo previsto para la interposición del recurso o medio de defensa que da acceso a la instancia inicial contemplada en la normatividad interior partidista o en la legislación ordinaria. Ello, porque en cada eslabón de toda cadena impugnativa rige el principio de preclusión, conforme al cual el derecho a impugnar sólo se puede ejercer, por una sola vez, dentro del plazo establecido por la normatividad aplicable. Concluido el plazo sin haber sido ejercido el derecho de impugnación, éste se extingue, lo que trae como consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de donde deriva el carácter de inimpugnable, ya sea a través del medio que no fue agotado oportunamente o mediante cualquier otro proceso impugnativo. Así, cuando se actualicen las circunstancias que justifiquen el acceso *per saltum* al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pero el plazo previsto para agotar el medio de impugnación intrapartidario o recurso local que abre la primera instancia es menor al establecido para la promoción de dicho juicio ciudadano, el afectado está en aptitud de hacer valer el medio respectivo dentro del referido plazo aunque desista posteriormente, o en su defecto, dentro del propio plazo fijado para la promoción de ese medio local o partidista, presentar la demanda del proceso constitucional y demostrar que existen circunstancias que determinen el acceso *per saltum* a la jurisdicción federal, pero si no lo hace así, aunque se justificara, el derecho del demandante a impugnar el acto que motivó su desacuerdo habrá precluido por falta de impugnación dentro del plazo señalado por la norma aplicable.”

Situación que aconteció en la presente instancia, pues de acuerdo a la normatividad interna del Partido de la Revolución

Democrática, los inconformes tienen cuatro días para hacer valer sus controversias.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106, inciso e) del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, el recurso de queja electoral es el medio idóneo y procedente para controvertir los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Partido, que no sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que cause perjuicio a los candidatos o precandidatos, cuya competencia recae en la Comisión Nacional de Garantías.

Asimismo, los artículos 107 y 108 del referido ordenamiento intrapartidario establecen que dicho recurso pueden interponerlo los candidatos o precandidatos por sí o a través de sus representantes acreditados, dentro de los cuatro días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que se dictó el acuerdo o aconteció el acto que se reclama.

Resultando procedente analizar la legislación intrapartidaria, del instituto político de la Revolución Democrática, en específico el Reglamento General de Elecciones y Consultas; ordenamiento que se invoca como un hecho notorio para este órgano Jurisdiccional, pues se accedió a su contenido a través del portal del Instituto Federal Electoral, sito en la dirección electrónica www.ife.org.mx y siguiendo la liga a la página electrónica oficial del mencionado instituto político.

Cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia número XX.2º. J/24, publicada en la página 2470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Enero de 2009, que establece:

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.”

De igual forma, deviene aplicable por analogía la tesis número XX.2o.33 K, publicada en la página 1643 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de 2007, que establece:

“HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA QUE EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UTILIZA PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en la página electrónica que el Poder Judicial de la Federación utiliza para poner a disposición del público, entre otros servicios, el directorio de sus empleados, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "Internet", del cual puede obtenerse el nombre del servidor público, el cargo que ocupa, así como su historial laboral; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.”

El aludido ordenamiento establece, entre otros artículos, los siguientes:

“Artículo 105.- Para garantizar que los actos y resoluciones de la Comisión Política Nacional y la Comisión Nacional Electoral se apeguen al Estatuto y a este Reglamento; los candidatos y precandidatos; a través de sus representantes cuentan con los siguientes medios de defensa:

I.- Las quejas electorales; y
II.- Las inconformidades.

Artículo 106.- Son actos u omisiones impugnables a través del **recurso de queja** electoral:

- a) Las Convocatorias emitidas para elección interna de renovación de órganos de dirección del Partido;
- b) Las convocatorias emitidas para la elección interna de cargos de elección popular del Partido;
- c) Los actos u omisiones de los candidatos o precandidatos, que contravengan las disposiciones relativas al proceso electoral, previstas en el Estatuto o Reglamentos;
- d) Los actos o resoluciones de la Comisión Política Nacional que a través de la Comisión Nacional Electoral o sus integrantes, que no sean impugnables por el recurso de inconformidad y que cause perjuicio a los candidatos o precandidatos; y

e) Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Partido, que no sean impugnables a través del recurso de inconformidad y que cause perjuicio a los candidatos o precandidatos;

Las cuales se resolverán en forma sumaria por la Comisión Nacional de Garantías.

Artículo 107.- Podrán interponer el recurso de queja electoral:

a) Cualquier miembro del Partido, cuando se trate de convocatorias.

b) Los candidatos y precandidatos por sí o a través de sus representantes acreditados ante el órgano electoral competente.

Artículo 108.- Los escritos de queja electoral deberán presentarse dentro de los cuatro días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que se dictó el acuerdo o aconteció el acto que se reclama.

[...]" (Lo resaltado es propio).

Así las cosas, al haberse determinado que el medio de impugnación intentado vía ***per saltum***, fue presentado en el plazo establecido por la normatividad interna del partido de la Revolución Democrática, para controvertir los actos intrapartidarios como los aquí planteados, lo anterior refuerza la determinación asumida por este órgano plenario, en el sentido de que la interposición del juicio ciudadano, para todos los efectos, se entiende presentado en tiempo.

Forma. Asimismo reúne de manera esencial los requisitos formales que establece el artículo 287 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en razón a que la demanda se formuló por escrito y contiene los nombres, domicilios y firmas autógrafas del promovente; el acto o resolución que se impugna; la autoridad responsable que lo emitió; los antecedentes y hechos motivo de la impugnación; los preceptos legales que se consideran violados, así como los agravios que, a decir de los impugnantes, les causa el acto o resolución cuestionado.

Legitimación y personería. Conforme a lo dispuesto por los artículos 9, 35, 41, base VI, de la Constitución General de la República; y 293 bis 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, el juicio que nos ocupa fue promovido por parte legítima, por tratarse

de ciudadano que lo interpone por sí, a nombre propio, en su carácter de militantes del Partido de la Revolución Democrática, en el que reclaman actos del Comité Ejecutivo Estatal y del Presidente de dicho Comité.

Definitividad. Respecto del requisito atinente, contemplado en el artículo 293 bis 2, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, debe decirse que la presente instancia es intentada por el recurrente vía *per saltum*.

Por ende, dicha petición debe ser estudiada de manera inicial, pues de ello depende el análisis de fondo de la cuestión planteada, máxime si se considera que la figura procesal “*per saltum*” constituye una excepción al principio de definitividad que rige el proceso.

En razón de que este órgano resolutor no advierte *de oficio* el surtimiento de alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, contempladas en los artículos 287, 289, 324, 325 y 326 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, procede realizar el estudio de las cuestiones planteadas, a la luz de los agravios que se formulan.

QUINTO.- Lineamientos generales. Por cuestión de orden, claridad y sistematización en los lineamientos o criterios jurídicos generales que habrán de observarse en el dictado de la presente resolución, a continuación se establecen los principios procesales que invariablemente se considerarán, a efecto de evitar repeticiones innecesarias en cada uno de los subsecuentes puntos de consideración, haciendo la salvedad, desde luego, de algún otro criterio, tesis relevante o jurisprudencia que sobre la

litis planteada pudiese resultar atinente acorde al desarrollo del estudio.

De tal manera, se precisa que la presente resolución jurisdiccional se sujetará irrestrictamente al principio de congruencia, rector del pronunciamiento de todo fallo judicial, acorde al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia en materia administrativa número **I.1o.A. J/9**, que establece:

“PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 731/90. Hidroequipos y Motores, S.A. 25 de abril de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

Amparo en revisión 1011/92. Leopoldo Vásquez de León. 5 de junio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Aristeo Martínez Cruz.

Amparo en revisión 1651/92. Óscar Armando Amarillo Romero. 17 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

Amparo directo 6261/97. Productos Nacionales de Hule, S.A. de C.V. 23 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Ricardo Martínez Carbajal.

Amparo directo 3701/97. Comisión Federal de Electricidad. 11 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Secretario: Serafín Contreras Balderas.”

En materia de valoración de los medios de convicción aportados al proceso, al realizar el análisis de las probanzas operará el principio de adquisición procesal en beneficio del más preciso esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos sobre los que se suscite controversia jurídica, de conformidad con la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:

“ADQUISICIÓN PROCESAL. OPERA EN MATERIA ELECTORAL. Opera la figura jurídica de la adquisición procesal en materia electoral, cuando las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los del coligante, lo que hace que las autoridades estén obligadas a examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica que debe prevalecer en el caso justificable, puesto que las pruebas rendidas por una de las partes, no sólo a ella aprovechan, sino también a todas las demás, hayan o no participado en la rendición de los mismos.

Por tanto, todas las pruebas que obren en el sumario, con independencia de la parte procesal que las hubiere aportado, serán analizadas y valoradas a efecto de sustentar la decisión jurisdiccional, con el valor probatorio que en su momento para cada una de ellas se precisará.

De igual forma, previo al análisis de los argumentos aducidos por los demandantes, cabe precisar que en el conocimiento y resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 293 Bis, último párrafo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se debe suplir la deficiencia en la expresión de los conceptos de agravio, siempre y cuando éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, con independencia de su ubicación en el escrito de demanda; consecuentemente, la regla de suplencia se aplicará al dictar resolución, en el juicio en que se actúa, siempre que se advierta la expresión de conceptos de agravio, aún cuando sea deficiente, si existe la aludida narración de hechos, de los cuales se puedan deducir claramente los conceptos de agravio conducentes.

Lo anterior tiene sustento en las tesis de jurisprudencia identificadas con la clave S3ELJ 03/2000, S3ELJ 02/98 y S3ELJ 04/99 consultables a páginas veintiuno a veintidós, veintidós a veintitrés y ciento ochenta y dos a ciento ochenta y tres, respectivamente, de la "*Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes*", volumen "*Jurisprudencia*", con los rubros y textos siguientes:

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho *iura novit curia* y *da mihi factum dabo tibi jus* (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio.”

“AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.- Debe estimarse que los agravios aducidos por los inconformes, en los medios de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier capítulo del escrito inicial, y no necesariamente deberán contenerse en el capítulo particular de los agravios, en virtud de que pueden incluirse tanto en el capítulo expositivo, como en el de los hechos, o en el de los puntos petitorios, así como el de los fundamentos de derecho que se estimen violados. Esto siempre y cuando expresen con toda claridad, las violaciones constitucionales o legales que se considera fueron cometidas por la autoridad responsable, exponiendo los razonamientos lógico-jurídicos a través de los cuales se concluya que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal, siendo ésta aplicable; o por el contrario, aplicó otra sin resultar pertinente al caso concreto; o en todo caso realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada.”

“MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.- Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación oscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.”

Al tenor de todo lo expresado, procede pues el análisis de los agravios planteados por los promoventes, a efecto de procurar una adecuada tutela judicial de los valores democráticos característicos de nuestro sistema electoral, reconocidos por las normas constitucionales y legales que conforman la normativa a que habrá de sujetarse el presente fallo, conforme a lo establecido por la siguiente jurisprudencia:

“PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los

artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-460/2000. Partido Acción Nacional. 29 de diciembre de 2000. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001. Partido de Baja California. 26 de febrero de 2001. Unanimidad de votos.

Revista Justicia Electoral 2002, suplemento 5, páginas 24-25, Sala Superior, tesis S3ELJ 21/2001."

SEXTO.- Pruebas. A continuación, se procede a realizar la relatoría de las pruebas ofrecidas por las partes, y en qué consiste cada una de ellas:

Del análisis del escrito de demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Humberto Molina Herrera, al mismo no se adjuntó documental alguna; no obstante en dicho medio de impugnación, se anunció el expediente integro de la solicitud de Registros y expedición del mismo, para la elección de Ayuntamiento en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato por el Partido de la Revolución Democrática.

De igual forma, en dicho medio de impugnación solicitó el requerimiento de diversas pruebas, mismas que se detallan más adelante como documentos presentados por la responsable a requerimiento de esta autoridad jurisdiccional.

Asimismo en cuanto al requerimiento formulado al **Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática**, a través de su Presidente Hugo Estefanía Monroy se le tiene por exhibiendo lo siguiente:

- Certificación emitida por el Licenciado Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, Secretario del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde hace constar el carácter de Presidente del Representante Partidista señalado.
- Copia certificada del acta de Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, de fecha 12 de abril del presente año.
- Copia certificada del acta de Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, de fecha 23 de abril del presente año.
- El acuse de recibo de documentación presentado ante la Secretaría del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 21 de abril de esta anualidad, relativa al Registro de candidatos para contender en la elección de Ayuntamiento en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato por el Partido de la Revolución Democrática.
- La solicitud de registro presentada por el Instituto Político de la Revolución Democrática de la planilla de Ayuntamiento de la ciudad de Acámbaro, ante el Instituto Electoral de Guanajuato.
- Solicitud de aspirantes a Precandidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores; así como el listado de aspirantes a diversas candidaturas, para el Municipio de Acámbaro, Guanajuato, por el Partido de la Revolución Democrática.

En cuanto al escrito presentado por el ciudadano **Miguel Ángel Montoya Hernández, en su carácter de tercero interesado**, se le tiene por ofreciendo como pruebas de su parte la copia simple, en una foja de la lista de los diversos cargos para la Elección Municipal de Acámbaro, Guanajuato, presentada ante la autoridad Administrativa Electoral, por el Partido de la Revolución Democrática.

Documentales públicas y privadas que merecen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 317, fracción I, 318, fracción IV, 319 y 320 del Código Electoral de la entidad.

SÉPTIMO.- Análisis de la pretensión *per saltum*. Debe señalarse que el análisis de la procedencia de la vía *per saltum* intentada por el incoante, resulta preferencial en esta resolución, pues de su actualización dependerá que este órgano plenario se encuentre en condiciones de estudiar las argumentaciones de fondo esgrimidas por el enjuiciante.

Advertido lo anterior, del escrito de demanda relativo al juicio ciudadano que se analiza, y de la correspondiente causa de pedir, se advierte que el promovente solicita que la autoridad jurisdiccional conozca “*per saltum*” de los actos reclamados, a través de los cuales el Comité Ejecutivo Estatal de su partido, por conducto de su presidente decidió subsanar el registro de la planilla a contender en el municipio de Acámbaro, sin que se haya hecho la sustitución del candidato a cuarto regidor, Miguel Ángel Montoya Hernández, por la candidatura del impugnante.

Con lo anterior, a juicio del promovente, se actualizó el incumplimiento del acuerdo de fecha veintitrés de abril de esta anualidad, por medio del cual el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, determinó otorgar al promovente, de manera definitiva, la candidatura a cuarto regidor propietario de la planilla a registrar para contender en la elección de ayuntamiento en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato.

La pretensión del accionante deviene **infundada**.

En los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 293 bis 2, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se establece que para la procedencia del juicio ciudadano se exige el agotamiento de todas las instancias previas correspondientes.

Cabe señalar que el requisito de procedencia que exige que los actos impugnados sean definitivos y firmes, se vincula con el principio de definitividad, de aplicación general a todos los medios de impugnación previstos en la legislación electoral local, incluido

evidentemente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Lo anterior además, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ37/2002, de rubro "**MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES. LAS CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 99 CONSTITUCIONAL SON GENERALES**", consultable en *Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial*. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tomo Jurisprudencia, páginas 181 y 182.

Con base en lo anterior, un acto o resolución no es definitivo ni firme, cuando en la ley o en la normativa interna de un partido político se prevea algún recurso apto para modificarlo, revocarlo o anularlo.

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que los medios de defensa previstos en la normativa interna de los partidos políticos forman parte del sistema de medios de impugnación en materia electoral, y que, por tanto, el requisito de definitividad y firmeza señalado implica que el acto objeto de impugnación debe constituir la última resolución dictada en la cadena impugnativa que se integra por los medios de defensa intrapartidaria y por los de índole administrativa y jurisdiccional que procedan, en forma concatenada.

Así, las impugnaciones contra actos o resoluciones de los órganos de los partidos políticos, no deben hacerse valer directa e inmediatamente a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sino que es necesario seguir y agotar la cadena impugnativa establecida en la normativa interna del instituto político y, una vez hecho esto, promover el

juicio indicado, contra lo resuelto por los órganos que hayan conocido en la última instancia interna precedente, combatiendo las consideraciones que sustenten esa resolución final dictada al respecto.

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha considerado que para que los militantes de un partido político puedan acudir ante la instancia jurisdiccional a promover un medio de defensa, es requisito que hayan agotado los medios de defensa intrapartidarios; sin menoscabo de que, excepcionalmente puedan acudir sin necesidad de cumplir con dicho requisito, cuando se incumpla alguna de las formalidades siguientes:

a) Que los órganos partidistas competentes estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos;

b) Que se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de sus integrantes;

c) Que se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente, y;

d) Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos político-electorales transgredidos.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ04/2003, identificada con el rubro: **"MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD"**, consultable en la compilación

de *Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*. Volumen Jurisprudencia, páginas 178 a 181.

De tal manera que, cuando falte alguna de esas exigencias o se presenten inconvenientes a que su inexistencia dé lugar, no existe para los justiciables dicha obligación, sino que tales instancias internas quedan como optativas, por lo que el afectado podrá acudir ante las autoridades jurisdiccionales, *per saltum*.

Cabe mencionar que dichos criterios jurisprudenciales, fueron incorporados por el legislador guanajuatense a la reforma publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil diez en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, relativa al Decreto 124 de la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional de esta Entidad, vigente a partir del día veintiocho posterior, mediante la cual, entre otras cuestiones, se instituyó el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

En efecto, al adicionarse el artículo 293 bis 2, se previó que dicho juicio ciudadano sólo será procedente: “cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las normas respectivas establezcan para tal efecto”; considerándose como instancias previas, entre otras, “las establecidas en los documentos internos de los partidos políticos”.

Igualmente se estableció en dicho dispositivo legal que agotar las instancias previas será obligatorio, siempre y cuando: “a) Los órganos competentes estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos; b) Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas

constitucionalmente; y c) Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir al promovente en el goce de sus derechos político-electorales transgredidos”

En ese sentido, se previó que cuando falte algún requisito de los señalados con anterioridad, “acudir a las instancias internas será optativo, por lo que el afectado podrá acudir directamente ante la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando se corra el riesgo de que la violación alegada se torne irreparable, y en su caso, acredite haberse desistido previamente de las instancias internas que hubiera iniciado, y que aún no se hubieran resuelto, a fin de evitar resoluciones contradictorias”.

Adicionalmente, la máxima autoridad jurisdiccional federal en materia electoral ha sostenido además que, excepcionalmente, el promovente puede acudir sin necesidad de cumplir con el requisito de definitividad, **si el agotamiento previo de los medios de impugnación, se traduce en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan implicar la merma considerable a sus derechos.**

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 09/2001, identificada con el rubro: **"DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO"**, consultable en la compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Volumen Jurisprudencia, páginas 80 y 81.

En ese orden de ideas, se colige que para que los accionantes puedan acudir *per saltum* a esta instancia jurisdiccional, es su obligación demostrar que existe al menos alguna de las circunstancias extraordinarias mencionadas, que justifiquen la necesidad de no agotar la instancia prevista por la normativa partidista.

Conforme a lo antes precisado, este órgano Plenario advierte que como se adelantó, no se justifica el análisis *per saltum*, de la legalidad de los actos reclamados, a través de los cuales el Comité Ejecutivo Estatal de su partido, por conducto de su presidente decidió subsanar el registro de la planilla a contender en el municipio de Acámbaro, sin que se haya hecho la sustitución del candidato a cuarto regidor, Miguel Ángel Montoya Hernández, por la candidatura del impugnante.

Actualizándose de acuerdo con el promovente, el incumplimiento del acuerdo de fecha **veintitrés de abril** de esta anualidad, por medio del cual el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, determinó otorgar al promovente, de manera definitiva, la candidatura a cuarto regidor propietario de la planilla a registrar para contender en la elección de ayuntamiento en la ciudad de Acámbaro, Guanajuato.

En efecto, del ocurso impugnativo se advierte que el actor hace descansar su petición en el hecho de que, en sesión de fecha treinta de abril del año en curso, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, otorgó y aprobó la solicitud de registro de la planilla presentada por el Partido de la Revolución Democrática para contender en la elección de ayuntamiento de Acámbaro, Guanajuato; considerando que esta instancia jurisdiccional local es la que oportunamente debe conocer del asunto, para

garantizar de manera formal y material la restitución de sus derechos político-electorales.

Sin embargo, las razones aducidas no constituyen motivo suficiente para que se atienda la solicitud planteada de que esta autoridad jurisdiccional resuelva, en acogimiento de la figura procesal “*per saltum*”, pues la misma no se actualiza.

Bajo esa óptica, debemos considerar que aún y cuando se haya solicitado el registro y se haya concedido a favor del Partido de la Revolución Democrática, para la elección de ayuntamiento a celebrarse en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, respecto de la cuarta regiduría, a persona diversa del enjuiciante, lo cierto es que tal circunstancia no torna irreparable el acto reclamado.

En efecto, no debe perderse de vista que el trámite de los medios de impugnación intrapartidarios, produce que el acto o la resolución impugnada quede sub iudice; extendiendo sus efectos, a los actos realizados por la autoridad administrativa electoral, esto es así, pues debe recalcarse que los medios de impugnación contemplados es los estatutos de los partidos políticos, forman parte de la cadena impugnativa electoral.

Lo anterior, con apoyo en las tesis número XXXII/2005 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invocada *mutatis mutandis*, como criterio orientador, cuyo rubro y texto son los siguientes:

“MEDIOS DE DEFENSA INTRAPARTIDARIOS. SU INTERPOSICIÓN PRODUCE QUE EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA QUEDE SUB IUDICE. —La impugnación de un acto o resolución intrapartidista a través de los medios de defensa previstos en los estatutos provoca, que ese acto o resolución quede sub iudice y **sus efectos se extiendan a los actos realizados por la autoridad administrativa electoral sobre la base de aquéllos.** Esto es así, porque la interpretación de los artículos 41, párrafo segundo, base IV, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite sostener que los medios de defensa intrapartidistas forman parte de la cadena impugnativa, que termina con la conclusión de los medios de impugnación previstos en la legislación electoral federal y, por lo tanto, en atención a tal calidad, es admisible atribuirles similares efectos jurídicos. **Lo resaltado es propio.**

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-468/2004.—Francisco Albarrán García.—30 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el criterio.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: José Arquímedes Gregorio Loranca Luna.

Nota: El contenido del artículo 41, párrafo segundo, base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta tesis, corresponde con el 41, párrafo segundo, base VI, del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, página 695.”

Así las cosas, debe establecerse con base en lo aquí resuelto, que no es procedente la pretensión del accionante, en el sentido de que esta autoridad jurisdiccional conozca del presente medio de impugnación, vía *per saltum*.

OCTAVO.- Reenvío. Al tenor de las consideraciones vertidas en el punto que antecede, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, considera que con la finalidad de restituir al justiciable de la manera más efectiva en sus derechos político-electorales, **debe ordenarse** a la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, órgano competente, para que proceda a substanciar el recurso procedente, una vez que se remita el original y sus anexos del juicio interpuesto por el promovente.

A efecto de evitar una mayor dilación en la solución de la presente controversia, se ordena a la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática que realice las gestiones necesarias para que en un plazo no mayor de **72 setenta y dos horas** contadas a partir de la notificación de la presente resolución, con plenitud de facultades se haga el pronunciamiento que corresponda respecto de la admisión del

recurso; y en caso de que se le diera trámite, se emita la resolución que en derecho estime conducente.

En ese sentido quedan vinculadas al presente fallo todos y cada uno de los órganos del Partido de la Revolución Democrática que por razón de sus funciones deban desplegar actos tendientes al cumplimiento de la presente resolución.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia S3ELJ 31/2002, consultable a foja ciento siete de la Compilación 22 Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, volumen Jurisprudencia, cuyo rubro y texto es al siguiente tenor:

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIEMENTE DE QUE NO TENGAN EN CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.- Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 17, párrafo tercero; 41 y 99 constitucionales, y acorde con los principios de obligatoriedad y orden público, rectores de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados en la vital importancia para la vida institucional del país y con objeto de consolidar el imperio de los mandatos que contiene la Constitución General de la República, sobre cualquier ley y autoridad, tales sentencias obligan a todas las autoridades, independientemente de que figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus funciones, les corresponde desplegar actos tendientes a cumplimentar aquellos fallos.”

Consecuentemente, la citada instancia partidista deberá informar a este órgano judicial cuando dicte la resolución que ponga fin al medio de impugnación, dentro de las 24 horas siguientes a que lo efectúe, adjuntando copia certificada legible de las constancias que así lo acrediten.

Se apercibe al citado órgano partidista vinculado a la presente resolución, que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo determinado en el presente fallo, se impondrá a cada uno de sus integrantes una multa de hasta cinco mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 354 Bis

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Lo anterior sin perjuicio de que, ante un eventual incumplimiento a lo aquí ordenado y de estimarse necesario, en plenitud de jurisdicción se pueda adoptar alguna medida adicional a efecto de restituir a los justiciables en el derecho conculcado en su perjuicio, en términos del mencionado artículo 328 del Código Comicial de la entidad.

En atención a lo antes resuelto, resulta innecesario el examen de los restantes motivos de disenso, pues con independencia del resultado que se obtuviera de dicho análisis, en nada variaría el sentido de lo ya resuelto y a nada práctico conduciría.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 31, párrafo décimo tercero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 293 bis 2 293 bis 3, 325 fracción VI, 335, 350, fracción I, 351, fracción XV y 352 bis, fracciones I, II, y XIV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato; 1, 4, 6, 9, 10, fracción XX, 11, 13, 14, 15, 16, 17, fracciones I y XVI y, 21, fracción XVI del Reglamento Interior de este organismo jurisdiccional, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato

RESUELVE:

PRIMERO.- El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

SEGUNDO.- Por las razones expresadas en el considerando séptimo de este fallo, no ha lugar al estudio *per saltum* planteada por el recurrente en el presente juicio ciudadano.

TERCERO.- Se ordena a la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, quien en un plazo no mayor de **72 setenta y dos horas** contadas a partir de la notificación de la presente resolución se pronuncie respecto de la admisión de recurso; y en caso de ser admitido, emita la resolución que en derecho corresponda.

Para lo anterior, se instruye al Secretario General de este órgano jurisdiccional que, previa copia certificada que se deje en el expediente, remita los originales de la demanda con sus anexos y las demás constancias atinentes al referido Órgano Partidario.

CUARTO.- Se ordena a la autoridad señalada en el punto anterior, para que dentro de las 24 horas siguientes que la mencionada instancia partidista dicte resolución que ponga fin al medio de impugnación, deberá informarlo a este Tribunal, adjuntado para ello copia certificada legible de las constancias que así lo acrediten, así como de la cédula de su notificación al impugnante.

QUINTO.- Se previene al ente en alusión, que en caso de no dar cumplimiento a lo determinado en los resolutivos que anteceden dentro del plazo establecido, se le aplicara la medida de apremio consistente en una multa de hasta cinco mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 354 bis del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Notifíquese personalmente al actor en su domicilio que obra en autos; asimismo al ciudadano que tiene reconocido su carácter de tercero interesado, en el domicilio que haya señalado para tal efecto; mediante **oficio** a la autoridad responsable y a la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática en sus domicilios; y por **estrados** a los demás interesados, adjuntándose en todos los supuestos copia certificada de la presente resolución.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados licenciados **Francisco Aguilera Troncoso, Martha Susana Barragán Rangel, Ignacio Cruz Puga, Héctor René García Ruiz y Francisco Javier Zamora Rocha**, los que firman conjuntamente, siendo Magistrado instructor y ponente el cuarto de los nombrados, actuándose en forma legal ante el Secretario General, licenciado Alejandro Javier Martínez Mejía.- Doy Fe.

Seis firmas ilegibles.- Doy fe.- - - - -